

Xenofobia de Campaña:

Un artículo [publicado en la agencia estatal mexicana Notimex](#) da cuenta del recrudecimiento de la xenofobia en la Argentina, luego de expresiones de políticos y periodistas que fueron ampliamente difundidas.

La nota hace referencia puntual a las [expresiones del senador Pichetto](#), que calificó de "resaca" a los inmigrantes de Perú y Bolivia, y relacionó la baja del delito en Perú con el aumento de personas oriundas de ese país viviendo en la Argentina. También menciona el [tuit de la periodista de Radio Nacional Silvia Mercado](#), que aseguró que los paraguayos "son chorros (ladrones) casi todos".

Estos aparentes exabruptos se enmarcan en expresiones de periodistas de alta repercusión en la sociedad, así como de informes de prensa e iniciativas oficiales que apuntan a identificar a los migrantes de países vecinos con el delito.

En el programa Periodismo Para Todos (PTP), que conduce Jorge Lanata, [se puso el foco en los gastos que representarían los extranjeros](#) para la Universidad y para la Salud Pública. El informe recibió duras críticas en las redes sociales, así como de intelectuales y [organizaciones estudiantiles](#). La ensayista [Beatriz Sarlo destacó](#) el papel del periodismo en la instalación de la xenofobia en el país, destacando precisamente el rol de Lanata en el tema.

La repercusión de esas posiciones se acentuó con informes de prensa y noticias construidas o no verificadas, en las que se dibuja a los países vecinos como contrapuestos al nuestro. Infobae, por ejemplo, [destacó un informe de Lanata](#) sobre paraguayos que cobran beneficios en Argentina; o el medio digital [informatosalta](#), que aseguró que Bolivia cobraría una tasa a los argentinos que ingresen a ese país, citando fuentes del consulado en Jujuy (dos días después, [otro medio aseguraba](#) que era decisión de las "autoridades del vecino país", agregando que producía malestar por los servicios gratuitos que reciben los bolivianos del lado argentino). El propio [gobierno boliviano emitió un comunicado](#) desmintiendo la especie.

Sin embargo, no se trató solamente de coincidencias o acuerdos de sectores de prensa. El propio Secretario de Derechos Humanos de la nación, Claudio Avruj, [aseguró que el gobierno está "de acuerdo](#) con las declaraciones de Pichetto sobre la inmigración".

Justificando medidas

Esas expresiones no quedaron sólo en los registros de los medios: autoridades nacionales y provinciales impulsaron medidas alineadas con los planteos xenófobos.

Pocos días después del informe de PTP, el gobierno de Chaco [decidió pedir a las autoridades](#)

[paraguayas](#) que cubran los costos que generen los pacientes de ese país en el sistema de salud de la provincia.

Ayer trascendió que el gobierno nacional emitirá un decreto para endurecer los controles migratorios, invirtiendo en infraestructura en los pasos migratorios y la aceleración de la expulsión de migrantes irregulares, entre otras medidas enumeradas en un artículo publicado en Clarín y [reproducido por la propia Cancillería](#) argentina.

Las medidas de este tipo no son nuevas en el gobierno nacional: en agosto, la Ministra de Seguridad, el Director de Migraciones y el titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acuerdo para [crear la primera cárcel de migrantes](#) del país. La decisión fue criticada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, aunque el caso de Milagro Sala muestra la reticencia del gobierno argentino en atender ese tipo de observaciones.

Los otros extranjeros

En medio de esos discursos, pasan desapercibidas otras medidas que desmienten las supuestas intenciones de defender los intereses nacionales.

Frente a la mentada preocupación por el costo de atender a ciudadanos de los países vecinos, hay una contraparte silenciada, que atañe a medidas lesivas para los intereses nacionales.

Otra vara guió el decreto que en julio [flexibilizó la venta de tierras rurales a extranjeros](#), cambiando las definiciones para considerar a una empresa como "extranjera" y exceptuando de su aplicación a áreas que se declaren como zonas industriales o áreas industriales. Según [el artículo del diario Perfil](#), es un primer paso para promover una ley que elimine las restricciones establecidas en una norma que elaboró el gobierno anterior y que rige desde el año 2014.

El 2 de noviembre se aprobó en Diputados el proyecto de participación Público-privada para encarar proyectos de obras públicas. La iniciativa tuvo [varias críticas](#) de parte del núcleo del kirchnerismo y otros sectores políticos; uno de los aspectos más polémicos es el de posibilitar la sumisión a tribunales extranjeros en caso de conflictos, y la baja exigencia ([incorporada en Diputados](#)) de que las obras incluyas insumos y mano de obra de origen nacional.

Estas medidas resaltan por relativizar las necesidades nacionales de forma explícita. Sin embargo, las medidas de fondo del gobierno han alentado a la especulación y han beneficiado a sectores ligados al sector externo, en desmedro del mercado local y de los ingresos nacionales.

Un dato que revela ese sesgo, entre otros, es la cuantiosa fuga de capitales en el año: a comienzos de octubre el [centro CEPA registraba la salida hacia el exterior de 10.000 millones](#) de dólares en un año, aprovechando la eliminación de los controles cambiarios.

Para tener una idea de lo que representan esos dólares transferidos al exterior, la suma alcanzaría para construir entre 76 y 100 hospitales como el de Clínicas, según los costos estimados en una [nota del diario Perfil](#).

El migrante de los países vecinos, más aún si es pobre, se convierte en chivo expiatorio de problemas cuyas causas lo trascienden ampliamente. Como señala el [artículo de Roberto Zamar en Página /12](#), estos discursos no son inocuos: "Como un mago que nos muestra un objeto para ocultar el resto".